

Vigencia de los conflictos étnicos en el mundo contemporáneo

Ana Margolis

LA ÚLTIMA DÉCADA del siglo XX muestra un mundo sacudido por el creciente surgimiento y propagación de conflictos y movimientos étnicos¹ que amenazan la estabilidad e integridad de un gran número de estados y plantean serias interrogantes sobre su viabilidad y permanencia futura. La recurrencia de estos fenómenos parece indicar que los imperativos estatales de integración, consolidación nacional y unificación territorial —tendientes a fusionar en un solo cuerpo homogéneo la diversidad multiétnica que conforma su base social— lejos de fortalecer y consolidar al Estado, suscitaron una fuerte resistencia de los grupos étnicos minoritarios —o políticamente no dominantes— que ven amenazada su identidad colectiva en estos procesos.²

¹ Sin negar la importancia de los factores sociales, políticos o económicos que intervienen en este tipo de fenómenos, la expresión “conflicto étnico” se refiere aquí a las situaciones donde “las diferencias étnicas se emplean consciente o inconscientemente para diferenciar a los participantes en una situación de conflicto”. Es decir, aquellas luchas donde la identidad étnica constituye “un poderoso símbolo de movilización y un factor determinante de la naturaleza y dinámica” de los mismos (Stavenhagen, 1990b:627-628).

² En este artículo, los términos “minorías”, “comunidades”, “grupos étnicos” y “etnias” se utilizan de modo genérico y se refieren a un gran número de grupos que, en cada Estado, suelen ser definidos de acuerdo con distintas ópticas teóricas, políticas e ideológicas (tribus, nacionalidades, minorías nacionales, nacionalidades minoritarias, indígenas, etc.). Como la discusión en torno a estos conceptos aún continúa, nuestra intención es emplearlos de modo operativo para referirnos a una colectividad que, más allá del tamaño numérico de su población, se identifica a sí misma y es identificada por otras con base en uno o varios de los siguientes elementos: la lengua, la religión, una comunidad de cultura, de formas de organización social, de sistemas de valores, el vínculo con un territorio, un ori-

Diariamente advertimos, a través de los medios, la creciente importancia de la etnicidad como un símbolo de movilización política en las luchas sociales de nuestra época.³ La oposición de los grupos étnicos a las políticas estatales que los afectan, aunada a la negligencia o incapacidad del aparato estatal para dar cabida a sus planteamientos, desencadenaron un ciclo de violencia que cobra innumerables víctimas en muchos países.

El propósito de este ensayo es revisar las tendencias observadas en el desarrollo de los conflictos étnicos más sobresalientes de los últimos años, a partir del análisis de fuentes periodísticas,⁴ particularmente durante el periodo comprendido entre 1987 y marzo de 1991.⁵

Por razones de espacio, el estudio no es exhaustivo ni abarca todas las luchas étnicas surgidas durante el periodo revisado. Esto no significa que los conflictos aquí expuestos sean un fenómeno nuevo. Pero los factores que han contribuido a su resurgimiento se vinculan con la historia de cada grupo en el proceso de consolidación de los estados modernos y conformación de sus fronteras. Muchas comunidades étnicas quedaron marginadas mientras otras lograron cierta representación con la adopción, por parte del Estado, de una estructura política federalista o de autonomías regionales, aunque en la actualidad sus demandas tienden a discutir la legitimidad de las instituciones políticas del Estado. Otros grupos, en cambio, quedaron incluidos en estados o regiones étnicamente distintos cuando la mayor parte de su comunidad logró consolidar un Estado nacional o una república en el seno de una confederación (como la Unión

gen común (real o mítico), así como la pertenencia a una nación, nacionalidad, raza o tribu. Estos elementos —tanto objetivos como subjetivos—, aislados o en conjunto, proporcionan una identidad que cohesiona y forja la lealtad de los individuos a una colectividad social hacia la cual reivindican pertenencia al tiempo que la diferencian de otra u otras colectividades.

³ La noción de “etnicidad” se utiliza aquí en un sentido muy amplio, como la identidad con el propio grupo étnico (Connor, 1978:386).

⁴ La información presentada en este artículo proviene de *Facts on File*, *Keesing's Contemporary Archives*, *Keesing's Record of World Events*, *The Economist*, *Newsweek*, *Time*, *L'Express*, *Le Monde*, *Le Monde Hebdomadaire*, *Le Monde Diplomatique en Español*, *Excelsior*, *El Día*, *El Universal*, *Uno más Uno*, *La Jornada*.

⁵ Debido al continuo surgimiento de conflictos étnicos y la complejidad de cada caso, el lector no encontrará aquí explicaciones teóricas globales; tampoco una polémica sobre los diferentes enfoques teóricos que orientan el entendimiento de los conflictos y movimientos étnicos contemporáneos. Para una discusión sobre estos aspectos, véanse en esta sección los artículos de Susana B.C. Devalle y Rodolfo Stavenhagen.

Soviética o Yugoslavia). En muchos otros países, principalmente en el Tercer Mundo, los conflictos étnicos son producto de políticas coloniales que dejaron como herencia un sistema político-administrativo desfavorable para ciertos grupos o que transformaron la composición etnodemográfica a través de migraciones masivas o el tráfico de trabajadores. En la actualidad, otra fuente importante de conflictos étnicos e interestatales constituye el flujo masivo, tanto de trabajadores como de refugiados, que huyen de los problemas económicos, sociales o políticos que afectan a sus países de origen.

Los factores que originan los conflictos étnicos son muy variados y las causas del malestar social subyacente en éstos pueden ser diversas: acceso desigual a recursos económicos o políticos, sentimientos de privación, temor de un grupo étnico a ser sobrepasado en términos demográficos, económicos o políticos, inconformidad por el asentamiento de migrantes o refugiados, problemas fronterizos o territoriales, políticas gubernamentales, etc. Las demandas abarcan reivindicaciones que van desde la defensa de sus derechos humanos, culturales, económicos o políticos hasta el cuestionamiento de la legitimidad de las instituciones políticas del Estado en el que están insertos. Su resistencia suele transitar por caminos muy variados: desde manifestaciones de protesta y huelgas, agresión o violencia entre la población civil, formación de organizaciones y partidos políticos, hasta la lucha armada, el terrorismo y la guerra civil.

En una amplia generalización, si se toma en cuenta la forma como se manifiestan actualmente los conflictos étnicos, aunque en un gran número de situaciones la etnicidad se ha convertido en un profundo símbolo de movilización política, destaca el hecho de que no todos los conflictos étnicos se presentan como luchas políticas. Es decir, la identidad étnica no implica la articulación y afirmación política del grupo étnico (*cfr.* Banuazizi y Weiner, 1986). De esta forma, se ha tomado como eje de exportación el ámbito en que estas luchas tienen lugar y el nivel de organización política logrado por los grupos étnicos. De acuerdo con estos criterios, se han diferenciado tres situaciones de conflictos étnicos: 1) aquellos que ocurren en el ámbito de las relaciones interpersonales entre la población civil, es decir, que no desafían en forma directa a las instituciones y políticas del Estado y se caracterizan por la ausencia de organización política de los grupos étnicos contendientes; 2) los conflictos interétnicos en los que el Estado se inclina abiertamente a favor de uno de los grupos e incluso es parte activa en el conflicto, aunque el grupo étnico subordinado no se ha organizado políticamente, y

3) los conflictos que asumen la vía política a través de la organización del grupo étnico en torno a reivindicaciones específicas.

La línea divisoria entre las tres situaciones muchas veces se desvanece y, de hecho, éstas tienden a traslaparse, particularmente con la tercera situación, en la que el tipo de reivindicaciones planteadas por el grupo étnico contribuirá a darle especificidad a cada caso. Es importante destacar que en todas las situaciones los conflictos étnicos son, por su naturaleza, fenómenos cambiantes y dinámicos. Muchos suelen iniciarse como problemas interétnicos entre la población civil pero pueden convertirse en un conflicto político, o ser manipulados en beneficio de ciertos intereses; otros, en cambio, aunque claramente políticos, pueden manifestarse recurrentemente como conflictos interétnicos entre la población civil.

Conflictos interétnicos entre la población civil

Empleo la noción de conflicto interétnico para referirme a situaciones caracterizadas por una atmósfera de hostilidad, racismo, intolerancia o discriminación en el ámbito de las relaciones interpersonales entre los distintos grupos étnicos que interactúan en el interior de un Estado.

A diferencia de aquellos conflictos en que los grupos étnicos conformaron organizaciones políticas o plantean reivindicaciones específicas, éstos suelen enfrentar principalmente a la población civil, víctima y victimaria de sus vecinos identificados como miembros del grupo étnico “enemigo”. Aunque estas situaciones también suelen presentarse en contextos donde los grupos étnicos contendientes tienen organizaciones políticas, es importante destacar que, en la medida que sus demandas son canalizadas a través de tales organizaciones (aun recurriendo a la lucha armada o al terrorismo), sus contiendas no se plantean predominantemente en estos términos, pues es la población civil quien toma parte activa —de modo espontáneo— en estos actos de violencia colectiva.⁶ No obstante, una vez que se desencadena, es factible la intervención de gru-

⁶ Entre otros ejemplos de este tipo de situaciones pueden mencionarse la masacre en 1984 de la población sikh en Delhi (efectuada por la población civil predominantemente hindú), después del asesinato de la primera ministra Indira Gandhi; los violentos ataques —recurrentes desde principios de 1990— de la población civil azeri (musulmanes chiitas) contra la población armenia (cristianos) en Azerbaiján (URSS), y los brotes de violencia entre zulúes y xhosas en los distritos negros de Sudáfrica.

pos de interés —tanto de los dirigentes de la oposición política como de las organizaciones étnicas, del Estado mismo, o de actores externos— en la manipulación de la violencia civil.

En muchos estados, estos conflictos permanecen latentes o sin manifestaciones de agresión física. Pero la sola existencia de una atmósfera de tensión o intolerancia entre grupos étnicos diferenciados puede conducir al estallido de un conflicto interétnico violento. Estos generalmente se manifiestan por protestas, manifestaciones, motines y, en su expresión más frecuente y dramática, brotes de violencia multitudinarios —esporádicos o recurrentes— entre la población civil, que llevan a situaciones altamente destructivas (matanzas, mutilaciones, saqueo e incendio de comercios y viviendas, etc.). El enfrentamiento suele comenzar con algún incidente —a veces aislado o trivial, otras veces significativo— que desencadena una espiral de violencia, aparentemente desorganizada, que puede extenderse prácticamente a todas las localidades habitadas por los grupos étnicos en cuestión.⁷

Los enfrentamientos interétnicos caracterizados por brotes de violencia colectiva entre la población civil, ocurren con mucha frecuencia en los países del sur de Asia, donde se les define como casos de violencia comunal; en años recientes también se han presentado en algunas regiones de la Unión Soviética y África.⁸ Las

⁷ Un interesante análisis sobre la naturaleza de estos conflictos se encuentra en el trabajo de Stanley J. Tambiah (1990), quien sostiene que estos disturbios interétnicos multitudinarios entre la población civil —aún cuando son de repetición cíclica— por su misma naturaleza tienen un ciclo de vida corto de “violencia orgásmica” y energías gastadas. Incluso después de los acontecimientos sangrientos los destructores civiles, al parecer, retornan a su rutina diaria, al lado de sus vecinos, como si nada hubiese sucedido.

⁸ En India, el comunalismo apunta hacia un fenómeno social y político que se opone y amenaza al ideal secularista. Este último, piedra fundamental del nacionalismo indio, significa el pleno respeto del Estado a todas las religiones existentes en la nación y su doctrina se funda en la armonía religiosa y política. El comunalismo, en cambio, se refiere a la intolerancia y a la división social. De acuerdo con Bipan Chandra (1987), el comunalismo podría definirse, a grandes rasgos, como una ideología que considera que un grupo social que profesa una religión particular constituye también un grupo con intereses económicos, políticos y sociales homogéneos. Para la visión comunal, la religión segmenta a la sociedad en comunidades cerradas, excluyentes entre sí y constituye el elemento básico en la división fundamental de la sociedad, y niega con esto la existencia de otro tipo de distinciones sociales como la clase, la lengua, la nacionalidad, etc. En su empleo más generalizado, la noción de violencia comunal, entendida como la manifestación extrema del comunalismo, no se refiere sólo a situaciones de violencia entre comunidades religiosas distintas, sino también a grupos sociales que se diferencian por otras ca-

diferencias religiosas constituyen en muchos casos la principal fuente de conflicto, como sucede entre hindúes y musulmanes en India.⁹ En otras situaciones, estas diferencias pueden exacerbar un antagonismo cuyas causas arrancan de otras condiciones. Por ejemplo, los conflictos que sacudieron en 1989 y 1990 a las repúblicas centroasiáticas de Uzbekistán, Tajikistán y Kirguizia, en la Unión Soviética —que involucraron a la población musulmana— al parecer fueron incentivados por la escasez de vivienda y el desempleo. En Uzbekistán, la población uzbeca (musulmanes sunitas) atacó a la minoría turca meskhet (musulmanes chiitas) —originarios de Georgia y trasladados por Stalin a Uzbekistán en 1944— exigiendo su expulsión (junio de 1989 y marzo de 1990). En Kirguizia, el detonador del conflicto entre uzbekos y kirguizos fue una disputa fronteriza por la posesión de predios para la construcción de viviendas (junio de 1990), mientras que en Tajikistán, la población nativa (musulmana sunita), protestó violentamente por la llegada de refugiados armenios (cristianos) —reubicados a causa de la masacre que los azeri (musulmanes) desencadenaron contra ellos en Azerbaiján—, por temer que les fueran asignadas viviendas (febrero de 1990). En todos estos casos, la violencia se manifestó por motines, matanzas y saqueos contra los grupos étnicos blanco de los ataques de la población local, en Tajikistán, aquéllos se extendieron también a personas de tipo europeo.

Estos conflictos entre la población civil no son casos aislados ni afectan sólo a comunidades religiosas. En ocasiones rebasan el ámbito de las relaciones interpersonales y trascienden las fronteras estatales y dan lugar a la intervención de actores externos, ya sea porque involucran a poblaciones de dos o más estados o porque debe recurrirse a la ayuda internacional para frenar la violencia.

racterísticas étnicas (la lengua, la cultura, la raza, la tribu, la nacionalidad, etc.) (cfr. Mukhia, 1987; Tambiah, 1990).

⁹ Un ejemplo reciente son los violentos choques entre hindúes y musulmanes, suscitados a fines de 1990 a raíz de las acciones emprendidas por grupos fundamentalistas hindúes para derribar una mezquita en la ciudad de Ayodhya y construir sobre sus ruinas un templo hindú. Estos choques cobraron más de 300 víctimas en 11 días de enfrentamientos y condujeron posteriormente a la caída del primer ministro, V.P. Singh, pues el Parlamento le retiró su apoyo por haber empleado fuerzas policíacas y de seguridad para reprimir a los fundamentalistas hindúes. Paradójicamente, el error del primer ministro fue tratar de impartir justicia, protegiendo un lugar de culto islámico. Esta medida fue mal acogida por una población mayoritariamente hindú (80% de los habitantes) que se inclinó a favor de los sectores más fundamentalistas.

Así sucedió en las capitales de Mauritania y Senegal en abril de 1989, cuando se enfrentaron las poblaciones de Nuakchott y Dakar con los inmigrantes senegaleses y mauritanos respectivamente, en una sanguinaria ola de violencia que arrojó un saldo de 450 muertos y culminó con el envío de aviones franceses, marroquíes y españoles para repatriar 50 000 refugiados a sus respectivos países. Entre los elementos étnicos que distinguían a las comunidades en conflicto destacan principalmente sus diferencias lingüísticas y su nacionalidad, aunque también se mezclaron criterios raciales: las víctimas en Senegal fueron moros, de lengua árabe y en su mayoría de piel clara, mientras que en Mauritania fueron negros senegaleses (de lenguas no árabes).¹⁰

Al parecer, las diferencias étnicas exacerbaron un conflicto cuyas causas pueden rastrearse en los problemas económicos y políticos de Mauritania y Senegal que han exasperado a sus poblaciones (programas de “ajuste estructural”, desempleo, desertificación creciente del Sahel). Por otra parte, lo que se inició como un enfrentamiento entre la población civil, adquirió rápidamente una dimensión política e internacional, no sólo por la necesidad de ayuda externa, sino también por el deterioro de las relaciones entre Mauritania y Senegal, debido a las acusaciones mutuas por no haber contenido con eficacia la violencia. Cabe destacar que antes del conflicto ya existía una tensa relación debida, entre otras cosas, a disputas fronterizas por la trashumancia de pastores nómadas moros a territorio senegalés y por la hospitalidad brindada por Senegal a los dirigentes del Frente de Liberación Africana de Mauritania (FLAM) —opositor al gobierno de Mauritania— que desde Dakar difundió propaganda llamando al combate contra los beydanes (árabe-bereberes que dominan en el gobierno de Nuakchott).

Estos acontecimientos son algunos ejemplos de la forma trágica en que un conflicto puede desarrollarse y desencadenar una lucha interétnica de dimensiones inimaginables. Aunados a los diver-

¹⁰ Este conflicto surgió a raíz de una disputa fronteriza por derechos de pastoreo y dio lugar a disturbios interétnicos que comenzaron en Dakar, con el pillaje contra los comercios mauritanos establecidos en esa ciudad y continuaron en Nuakchott, con una incendiaria ola de violencia en la que las multitudes mauritanas atacaron a población inmigrante senegalesa. Los incidentes sacudieron durante cinco días ambas ciudades en una creciente espiral de venganza y violencia que se agudizaba conforme se difundían las noticias sobre las atrocidades cometidas por la población local de ambas ciudades contra los inmigrantes. El envío de tropas y el toque de queda fueron insuficientes para detener la violencia colectiva. (Gériviére, 1989:9; Fritscher, 1989:1 y 9).

Los factores económicos y políticos que constituyen la base del descontento social, los rumores, los relatos de testigos, los medios locales de información y la oposición política interna desempeñaron un importante papel al estimular la violencia y la xenofobia de las multitudes. El ingrediente étnico, aun en los casos donde no fue la causa principal de conflicto, ocupó un lugar central como detonador y aglutinador de la violencia. Hubo en todos los casos un patrón similar aunque, a diferencia de Mauritania y Senegal, en India y en la Unión Soviética estos conflictos no alcanzaron una dimensión internacional (aunque sí una amplia cobertura de los medios).

**Conflictos étnicos entre un grupo étnico en el poder
y un grupo subordinado sin articulación política**

Un conflicto interétnico entre la población civil puede, por lo general, adquirir una dimensión política y en muchas ocasiones el Estado desempeña un importante papel en su surgimiento y desarrollo. Si bien en las sociedades multiétnicas la mayor parte de los conflictos étnicos involucran de una u otra forma al Estado y la represión y violencia gubernamentales suelen ser prácticamente una constante, aquí sólo me referiré a situaciones en las que los grupos étnicos minoritarios no han conformado organizaciones políticas y sin embargo son víctimas de la violencia gubernamental.

Cuando un grupo étnico controla tradicionalmente el poder del Estado y en consecuencia las fuerzas armadas, es factible que ante una potencial amenaza a su hegemonía recurra al uso de la fuerza contra la población civil identificada con el grupo cuyas demandas y movimientos tienden a desafiar su supremacía o amenazar la unidad nacional o integridad territorial del Estado.¹¹ No obstante, hay ocasiones en que aun cuando los grupos étnicos subordinados no tienen una organización política ni plantean reivindicaciones específicas, por el solo hecho de tener una importante presencia demográfica son víctimas, sin justificación evidente, de la represión y violencia gubernamental. Ésta se traduce muchas veces en traslados

¹¹ Esto ocurre con frecuencia en contextos donde los grupos étnicos recurrieron a la lucha armada; la violencia gubernamental, que se manifiesta de diversas formas, no sólo se dirige contra los ejércitos guerrilleros sino también contra la población civil. Éste ha sido el caso de la población kurda en Irak y Turquía, de la tribu dinka en Sudán o de la población indígena de Guatemala, por mencionar sólo unos ejemplos.

forzosos, arrestos arbitrarios, juicios sumarios, terrorismo de Estado e incluso el genocidio o la masacre del grupo étnico —como el que llevó a cabo la etnia minoritaria tutsi contra los hutu en Burundi en 1972 y posteriormente en 1988— o, si acceden al poder por medios democráticos, a un golpe de Estado —como el ocurrido en Fiji en 1987.¹²

Estos dos países tienen en común su reciente pasado colonial y su composición etnodemográfica. Tanto en Fiji como en Burundi, conviven dos grupos étnicos distintos. El grupo en el poder es numéricamente minoritario. Asimismo, en ambos países existe una distribución desigual de recursos económicos y políticos entre las etnias. En Burundi, estos recursos se concentran en la tribu pastoral tutsi, que controla el gobierno, el ejército y la economía, pese a que sólo constituye 15% de la población total, mientras que los hutu, tribu campesina, constituyen 85% de la población. Esta superioridad numérica, aunada a un régimen esencialmente feudal y carente de instituciones democráticas y al temor inspirado por el ejemplo de la vecina Ruanda (de composición étnica similar y cuya revolución, sostenida activamente por la iglesia católica condujo a los hutu al poder y a la masacre de miles de tutsi), llevaría a estos últimos a desencadenar en 1972 lo que se llamó “genocidio selectivo”. Más de 100 000 hutu, principalmente de la élite educada, fueron asesinados, aunque se estima que la cifra se aproxima a los 200 000 (*Facts on File*, 1988:623 F1). Estos acontecimientos despertaron fuertes protestas internacionales: Amnistía Internacional publicó varios informes alarmantes; las relaciones con Bélgica —la anterior metrópoli— se deterioraron y Bruselas suspendió varios proyectos de cooperación. Aunque el gobierno actual se ha esforzado por lograr una reconciliación nacional, las causas de fondo continúan y en agosto de 1988 hubo brotes de violencia interétnica que, de acuerdo con cifras gubernamentales, cobraron 5 000 vidas. Las distintas versiones —y los testimonios de varios de los 35 000 hutu refugiados en Ruanda— señalan a la población tutsi como inicia-

¹² De la gran diversidad de situaciones en las que el Estado desempeña un papel protagonista en un conflicto interétnico, sólo me referiré a estos dos ejemplos. Algunos acontecimientos del pasado incluyen situaciones extremas de violencia étnica auspiciada por el Estado, como el genocidio de judíos y gitanos cometido por la Alemania nazi o el de los armenios a manos de los turcos. No obstante, la violencia gubernamental adopta muchas modalidades y una de las más frecuentes suele ser el desmantelamiento de poblados y traslado forzoso de poblaciones enteras, como el llevado a cabo por el régimen de Ceausescu contra la minoría húngara en 1988.

dora de la violencia mediante acciones emprendidas por el ejército (formado por tutsi), que masacró a miles de hutu indefensos.

En Fiji, el conflicto étnico entre la población nativa melanesia (46% de la población total) y los descendientes de inmigrantes indios (48% de los habitantes) —dos grupos claramente diferenciados por su cultura, religión, historia y lugar de origen— es fundamentalmente resultado de la colonización británica que, al incorporar mano de obra procedente de India para las plantaciones de azúcar, transformaron el balance etnodemográfico del archipiélago. Asimismo, la administración colonial favoreció a los melanesios (al garantizarles la propiedad de la tierra y respetar su sistema de gobierno bajo el mando de los jefes tradicionales locales, regionales y generales) y dejó como herencia un sistema político desfavorable para la población inmigrante y sus descendientes. La independencia lograda en 1970 no modificó este orden. La Constitución garantiza a los melanesios el 80% de la tierra y desde entonces conservaron el poder político, mientras la población de origen indio tenía el poder económico (Tinker, 1987:3). Con las elecciones democráticas de 1987 los indios asumieron la mayoría de los puestos de gobierno. Esto provocó fuertes temores entre los jefes tradicionales melanesios, y desembocó al poco tiempo en un golpe de Estado —apoyado por la policía y el ejército— que devolvió el control del gobierno al grupo melanesio. Una vez en el poder, este último modificó la Constitución para impedir a los descendientes de indios el acceso a los cargos de primer y viceprimer ministros y reducir su participación en el Parlamento. Esto adquirió rápidamente una dimensión internacional: a raíz del golpe se intensificaron las tensiones entre ambos grupos y muchos indios huyeron a Australia e India debido a los ataques de que eran objeto. La opinión internacional manifestó su reprobación al régimen, Australia y Nueva Zelanda desconocieron su autoridad y amenazaron con suspender la asistencia económica; Nueva Guinea y Vanatu deploraron el golpe mientras que India defendió a la población de origen indio. Francia y Estados Unidos, en cambio, reaccionaron con prudencia pues, al parecer, las disposiciones del gobierno golpista coincidían con sus intereses. La CIA había visitado Fiji poco antes y el golpe se produjo cuando el archipiélago empezaba a distanciarse de Occidente, con una política más firme frente al problema nuclear y a la presencia francesa en Nueva Caledonia (Pons, 1987:9). Un año después continuaba el conflicto, con indicios de ser apoyado por otros países, particularmente por el gobierno de India, implicado en un contrabando de armas —al parecer destinado a derrocar al actual

régimen— descubierto en aldeas pobladas predominantemente por población de origen indio.

De lo anteriormente descrito, en Fiji destacan las dificultades de instaurar un régimen democrático, independiente de la identidad étnica, en contextos donde la historia —marcada por las políticas coloniales— y la etnicidad, han definido la ubicación diferenciada de los grupos dentro de la sociedad y establecido sus fronteras de acción. Tanto en Burundi como en Fiji, el conflicto étnico se plantea abiertamente como político: el grupo étnico que ha monopolizado el poder —y que además es numéricamente minoritario— no quiere compartirlo (hecho que a nadie extraña) y busca evitar a toda costa verse reducido a una comunidad política impotente. En Burundi, además, la violencia gubernamental contra la etnia mayoritaria y oprimida da cuenta de la vulnerabilidad del régimen y la amenaza permanente que se cierne sobre éste al sustentarse en una etnia minoritaria. Por otra parte, llama la atención la repercusión internacional de ambos conflictos: protestas por parte de otros estados y de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos; presiones económicas, y problemas provocados a otros países por el flujo de refugiados. El conflicto en Fiji, dada la posición estratégica del archipiélago, se convirtió en foco de atención de las superpotencias con intereses estratégico-militares en la región, así como por parte de India, cuya interferencia, al parecer, fue más allá de la simple defensa de los derechos humanos al proveer de armas a una población que hace más de medio siglo echó raíces en otras tierras ¿Por una razón de etnia? ¿Por geopolítica? ¿Por el temor a un flujo de refugiados a quienes habría que proveer de trabajo y sustento?

Conflictos étnicos en los que los grupos se organizan en torno a demandas específicas

Estos conflictos también suelen enfrentar a una etnia oprimida y al Estado pero, a diferencia de los anteriormente mencionados, en este tipo de situaciones los grupos étnicos subordinados se articulan en torno a reivindicaciones específicas que tienden a demandar cambios institucionales o constitucionales al Estado y en algunos casos plantean serios cuestionamientos a su legitimidad.

Los movimientos étnicos abarcan una amplia gama de situaciones y responden a una gran diversidad de factores históricos, políticos y culturales, los cuales se vinculan frecuentemente con pro-

cesos de dominación (colonización, anexión de territorios, trazado artificial de fronteras) y de construcción nacional, una de cuyas premisas básicas consiste no sólo en consolidar la unidad territorial del Estado sino también crear una población culturalmente homogénea, con un sentido de vínculos étnicos únicos. Este objetivo se traduce en políticas gubernamentales que con frecuencia contradicen las aspiraciones de los grupos étnicos minoritarios o no dominantes y tienden a privarlos de derechos percibidos por ellos como básicos para preservar y desarrollar su identidad colectiva.

Puede afirmarse que la defensa de la identidad colectiva del grupo (lingüística, religiosa, cultural, territorial, nacional, etc.) constituye el ingrediente esencial en todos los movimientos étnicos que tienen lugar en el mundo actual.¹³ Sin embargo, varían las distintas percepciones de los propios grupos respecto a los requisitos necesarios para preservar y desarrollar su identidad; así como los medios para lograrlo. Por esto, las reivindicaciones étnicas suelen ser variadas y la confrontación toma caminos diversos, traducéndose en movimientos que van desde la lucha por el respeto a la identidad colectiva del grupo étnico sin criticar a las instituciones y políticas del Estado, pasan por la resistencia u oposición a medidas o políticas gubernamentales o la aspiración por la autonomía o el federalismo, hasta la secesión o la independencia.

Los gobiernos responden también de diversas maneras e incluso un mismo régimen puede adoptar respuestas diferentes para cada grupo. Por otra parte, es posible que tanto el Estado como las organizaciones étnicas modifiquen sus objetivos y estrategias de lucha conforme evoluciona el conflicto.

Por razones de espacio y debido a la complejidad del tema, expondré de manera general algunas tendencias observadas en los planteamientos étnicos y centraré la atención principalmente en el tipo de reivindicaciones planteadas (derechos étnicos, autonomía, reunificación del grupo e independencia política). Esta revisión también tomará en cuenta la direccionalidad de sus movimientos, sus formas y sus estrategias de lucha.

La lucha por los derechos étnicos

Muchos estados, al querer forjar una identidad nacional homo-

¹³ En algunas situaciones la lucha no se plantea como el derecho a la diferencia sino, por el contrario, por el derecho a la plena ciudadanía y el fin de la discriminación (*i.e.* negros en Sudáfrica).

génea, se niegan a reconocer a las minorías étnicas y aplican políticas tendientes a su asimilación, muchas veces forzada. Estas políticas suelen ser muy variadas. Destacan, entre otras, la prohibición de profesar una religión o expresarse en un idioma diferentes del oficial, o la imposición de un código legal opuesto a las formas de vida tradicionales de las minorías étnicas. Esto es constante prácticamente en todos los contextos y afecta de muy diversas formas a un gran número de minorías religiosas, lingüísticas, nacionales, culturales e indígenas.

Algunos ejemplos recientes de conflictos donde los grupos luchan por el respeto a su propia especificidad étnica, sin demandar cambios estructurales al Estado se refiere por un lado a las políticas de “bulgarización” de la minoría turca en Bulgaria (prohibición de hablar su idioma, practicar su religión y usar nombres turcos), y por otro, a las políticas asimilacionistas de la Rumania de Ceausescu contra las minorías nacionales húngara y alemana. Las medidas adoptadas por ambos países provocaron fuertes protestas por parte de estos grupos y agudas tensiones con Turquía y Hungría, respectivamente.¹⁴

La imposición cultural, religiosa o lingüística se presenta incluso en estados que reconocen su composición multiétnica, como India, donde los grupos con fuerte identidad lingüística se han resistido violentamente a las presiones del gobierno del centro de imponer el hindi como idioma oficial y administrativo en todo el país, al tiempo que la población musulmana se ha opuesto tenazmente a la imposición de un código civil uniforme.

Las restricciones gubernamentales sobre los derechos lingüísticos, culturales o religiosos de las minorías, generalmente expresan la incapacidad del Estado para permitir la diversidad étnica, en especial —como es frecuente— cuando la etnia mayoritaria o dominante identifica el nacionalismo de Estado y el proyecto de construcción nacional con un único modelo cultural, una lengua y a veces una sola religión; es decir, con su propia identidad étnica. Así, cualquier otra identidad cultural amenaza a la unidad nacional. Esto se observa en estados que reconocen oficialmente su diversidad so-

¹⁴ La decisión del nuevo régimen de Bulgaria, en enero de 1990, de poner fin a la política de “bulgarización” de la minoría turca (vigente desde 1984) y restaurar sus derechos culturales, paradójicamente dio lugar a enérgicas protestas de diversos sectores y organizaciones de la población eslava búlgara que, argumentando que estas medidas “amenazan la seguridad y unidad nacional”, realizaron una serie de paros y huelgas que afectaron por varios días diversas ciudades.

cial multiétnica, pero sobre todo en países cuyas minorías mantienen una fuerte identidad étnica con el resto de su comunidad que conformó un Estado nacional, generalmente al otro lado de la frontera. Este es el caso de los países de Europa Oriental (*i.e.*: turcos en Bulgaria y Grecia; húngaros y alemanes en Rumania; griegos en Albania y Turquía; albaneses en Yugoslavia, etc.). Otras veces, la amenaza sobre estas identidades minoritarias suele conducir a una mayor organización política de los movimientos étnicos y a la lucha por un marco político adecuado para preservar y desarrollar su identidad colectiva. Este tipo de demandas frecuentemente incorporan también reivindicaciones económicas y territoriales.

La lucha por la autonomía

Uno de los objetivos de las luchas étnicas es lograr la autonomía cultural o política. Las organizaciones políticas étnicas no se oponen a la soberanía del Estado ni demandan separarse de éste, simplemente pretenden el control de sus asuntos internos junto con el reconocimiento estatal de sus propias estructuras político-administrativas. Por lo general, los movimientos autonomistas intentan asegurar el control sobre todos los aspectos de la vida cultural, económica, política y social de la comunidad o del grupo, excepto la política exterior y la defensa del Estado. En la práctica, hay diversos grados de autonomía, en una escala que va desde mínimos derechos culturales hasta un máximo federalismo autónomo (Smith, 1981:16). Este último se presenta como una reivindicación recurrente en algunas repúblicas soviéticas, entre ellas Rusia, Bielorrusia y Ucrania, cuyos parlamentos introdujeron en 1990 medidas que establecen la supremacía de sus leyes frente a las del gobierno central, junto con disposiciones que les otorgan mayor control sobre los recursos económicos y riquezas naturales de sus territorios (sin plantear con ello su independencia de la URSS).

Muchos grupos étnicos difícilmente ven satisfechas sus demandas de autonomía y en algunos casos la oposición gubernamental a éstas puede conducir a la guerra civil, como en Sudán, donde las tribus negras del sur del país, predominantemente cristianas y animistas, luchan por su autonomía y la abolición del Sharia o ley islámica, en contra del gobierno musulmán dominado por árabes en el norte del país.¹⁵ En otras situaciones, en cambio, la autonomía

¹⁵ Este conflicto atrajo la atención de estados con intereses específicos sobre

ha sido alcanzada en tiempos difíciles y después de intensos enfrentamientos. Destaca el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua, que reconoce los derechos culturales, económicos y políticos de los miskitos, sumos y ramas (estatuto jamás reconocido por otro Estado americano para su población indígena), alcanzado en el contexto de un largo periodo de confrontaciones y negociaciones, al centro de la guerra entre el régimen sandinista y la contrarrevolución apoyada por Estados Unidos (*cfr.* Vilas, 1989; Dunbar Ortiz, 1988; Dodds, 1989).

Algunos gobiernos han propuesto diversas formas de autonomía a ciertas minorías, muchas veces en respuesta a sus aspiraciones separatistas. Tal fue el caso de los pueblos Naga y Mizo, en la frontera nororiental de India que, después de una prolongada lucha armada separatista, obtuvieron el estatuto de estados federados para sus territorios. No obstante, la autonomía ofrecida es rechazada por los grupos separatistas o no surte efecto en la práctica, como con los kurdos en Irak, cuyas organizaciones políticas rechazaron la autonomía territorial concedida por el gobierno en 1979, pues no incluía la totalidad del Kurdistán (Donnadieu, 1987:14).¹⁶ O la propuesta del gobierno de Sri Lanka —también rechazada por los militantes tamiles— de crear Consejos Provinciales basados en el modelo federal indio, preservando la naturaleza unitaria de la Constitución y la integridad del país.¹⁷

En otras situaciones, algunos grupos étnicos se ven afectados por la supresión de la autonomía de que gozaban. Por ejemplo, los albaneses de la provincia del Kosovo en Yugoslavia —junto con la provincia autónoma de Vojvodina— perdieron en marzo de 1989 el estatuto de autonomía que tenían desde 1974 y que les otorgaba facultades sobre cuestiones de seguridad, justicia y otros asuntos

la región —el gobierno es financiado y equipado por diversos países árabes, especialmente por Libia, mientras que los rebeldes cuentan con el apoyo del África negra—, así como de organizaciones de derechos humanos que han denunciado acciones gubernamentales genocidas contra la tribu dinka a fin de privar a los ejércitos rebeldes de su base social (masacre de la población civil y el desvío de la ayuda alimentaria internacional destinada a combatir la hambruna que azota al país).

¹⁶ La persecución gubernamental contra este pueblo a raíz de la Guerra del Golfo Pérsico y la atención internacional que han atraído estos acontecimientos, aunadas al enorme flujo de refugiados kurdos en países vecinos, destacan la imperante necesidad de legalizar adecuadamente y poner en práctica su autonomía territorial.

¹⁷ Éste fue uno de los puntos fundamentales del Acuerdo de Paz firmado por India y Sri Lanka (Rupesinghe, 1988:159-160).

políticos. La reforma constitucional, introducida por el parlamento de la república de Serbia, permite ahora que ésta controle la provincia y defina las principales cuestiones jurídicas y políticas de la entidad, donde los serbios (cristianos) representan apenas una quinta parte de la población. Todas estas medidas provocaron violentas protestas de la población albanesa (musulmanes), al tiempo que han exacerbado sus demandas nacionalistas y acentuado las tensiones con la vecina Albania, cuyo gobierno acusa a Yugoslavia de oprimir brutalmente a los habitantes albaneses que demandan mayor autonomía para la provincia del Kosovo.

Éstos constituyen sólo algunos ejemplos de la amplia gama de situaciones en las que la autonomía se plantea como un derecho esencial para el desarrollo de los grupos étnicos. En algunos casos, la autonomía de un grupo étnico es percibida como una amenaza a la seguridad e integridad del Estado; en otros, ésta se plantea como una propuesta gubernamental para garantizar y preservar su integridad. En la práctica su viabilidad se enfrenta con muchas dificultades, en particular cuando el territorio de la minoría contiene recursos naturales favorables para el desarrollo económico del conjunto del país (como es el caso del Kurdistan y de la República de Rusia),¹⁸ o cuando su localización fronteriza significa un peligro constante para mantener y resguardar tanto la integridad como la seguridad del Estado (Kosovo, Tibet, Kurdistan, Sudán, la Costa Atlántica en Nicaragua, entre otros). En estas situaciones, el interés del Estado tiende a prevalecer sobre el de la minoría y es factible que, aún con un régimen de autonomía, la fuente de conflicto permanezca latente, pudiendo radicalizar las aspiraciones étnicas por una mayor soberanía o incluso, la secesión.

La lucha por la reunificación del grupo étnico

Algunos grupos étnicos no proponen reivindicaciones autonomistas ni necesariamente secesionistas, aun cuando en un momento dado

¹⁸ Rusia produce el 90% del petróleo soviético, 70% del gas y la mayor parte de las exportaciones de papel, níquel, cobre y aluminio (Lloyd, 1990). Por otra parte, el Kurdistan es rico en petróleo; contiene importantes yacimientos en las regiones kurdas de Irak, Turquía e Irán. Estos gobiernos han rechazado y oprimido reiteradamente a la minoría kurda y solamente Irak les concedió autonomía. Ésta sin embargo, sólo incluye el 60% del territorio kurdo y excluye las áreas petroleras (Donnadieu, Gutiérrez y Margolis, 1986:64 y 74).

tiendan a incluir tales demandas. Este tipo de situaciones tienden más bien hacia un carácter irredentista. Es decir, son movimientos en los que una comunidad étnica, cuyos miembros están divididos o fragmentados en estados separados —o en repúblicas distintas dentro de un Estado de estructura federal—, “busca la reunificación con el resto de su comunidad, y la recuperación de los territorios “perdidos” o “irrecuperables”, ocupados por sus “miembros” (Smith, 1981:17).

En algunas situaciones la estrategia irredentista busca la secesión de un Estado para luego incorporarse a aquel donde habita el resto de su comunidad, como sería el caso de la disputada región musulmana de Cachemira en la conflictiva frontera Indo-Pakistání, cuyas demandas de autodeterminación, apoyadas por Pakistán, condujeron a principios de 1990 a estos estados al borde de otra guerra. No obstante, cuando el grupo étnico minoritario que aspira a la reunificación con un Estado vecino no posee una base territorial exclusiva y claramente delimitada y de hecho, comparte el territorio en el que habita con el grupo mayoritario y antagónico, la reunificación se convierte en una meta imposible. Tal es, a mi juicio, uno de los aspectos que impiden llegar a un arreglo pacífico en el caso del histórico y en extremo complejo conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte, dominado por el problema de la unión o la separación. Esta división política ha seguido líneas religiosas pues los protestantes, descendientes de colonizadores ingleses y escoceses, desean seguir vinculados con Gran Bretaña, mientras la minoría católica —sucesores de los nativos habitantes irlandeses y étnicamente emparentados con la población mayoritaria de la vecina Irlanda— aspiran a la reunificación con esta república. Los antagonismos políticos y religiosos entre ambas comunidades han conducido a graves desórdenes civiles, así como a actos recurrentes de terrorismo y venganza y, a pesar de los recientes esfuerzos de Inglaterra e Irlanda por llegar a un acuerdo negociado que ponga fin a la violencia (Acuerdo Anglo-Irlandés, firmado en 1985), no parece encontrarse una solución al problema debido a la intransigencia de los grupos en conflicto (*cfr.* Arthur; 1988; Hadden y Boyle, 1988).

En estados de estructura federalista como la Unión Soviética, estos movimientos no plantean por lo general la restructuración de las fronteras internacionales sino, más bien, de las divisiones internas que han dividido a su vez a los miembros de una misma comunidad en dos o más estados o repúblicas federadas. Estos conflictos suelen involucrar a una región autónoma incluida en una

república de composición étnica diferente, que aspira a separarse de ésta e incorporarse a aquella donde habita el resto de su comunidad étnica. Éste sería el caso de la región autónoma de Nagorno-Karabakh, enclave de población armenia cristiana que desde 1923 está bajo la jurisdicción de Azerbaiján (de población musulmana chiita) y que aspira a formar parte de Armenia, demanda apoyada por esta última. Tanto Armenia como Azerbaiján se disputan la soberanía sobre la región, y el conflicto —iniciado en 1988 con manifestaciones nacionalistas en Nagorno-Karabakh en demanda de la reunificación— se ha exacerbado por las diferencias religiosas entre ambas poblaciones, y ha provocado una creciente espiral de violencia caracterizada por manifestaciones y huelgas generales; el bloqueo de Azerbaiján al transporte ferroviario que suministra productos básicos a Nagorno-Karabakh y Armenia para exigir que esta última renuncie a sus reclamos sobre la región; protestas y enfrentamientos interétnicos entre la población civil en ambas repúblicas; amenazas de secesión por parte de grupos extremistas de Azerbaiján; formación de milicias voluntarias y organizaciones de autodefensa fuertemente armadas enfrentándose en el límite entre ambas repúblicas y en Nagorno-Karabakh; disturbios en la frontera de Azerbaiján con Irán, acompañados de la destrucción de puestos fronterizos en demanda de la reunificación de la población azeri dividida por las fronteras internacionales (enero, 1990). Ambas repúblicas se enfrentan ahora a una virtual “guerra civil”. Aunque el gobierno central estableció una Comisión Especial para analizar el problema, rechazó sostenidamente las demandas de reunificación de la población armenia y ha optado por una solución militar del conflicto, incrementando el envío de tropas del Ministerio del Interior e intensificando la represión armada.

El desarrollo de esta lucha entre azeris y armenios muestra cómo se entremezclan diversos elementos en un conflicto étnico. Los reclamos territoriales, aunados al anhelo de reunificación de la minoría con el resto de su comunidad, condujeron a la confrontación con el gobierno central y a la lucha armada y a la violencia interétnica entre la población civil. Aquí, el enfrentamiento, agudizado por las diferencias religiosas, no se planteó entre una etnia oprimida y un Estado, sino entre dos etnias minoritarias hostiles y un Estado, mayoritariamente eslavo, cuya legitimidad comienza a ser cuestionada en distintos rincones del país.

La lucha por la independencia política

Al igual que en los conflictos anteriormente tratados, las reivindicaciones de los movimientos étnicos por la independencia política también se sustentan en las diferencias étnicas y en el sentido de una supuesta o real distinción cultural. Sin embargo, estos movimientos, que incluyen tanto demandas secesionistas como por la descolonización (en caso de territorios bajo dominación externa), aspiran a una existencia territorial totalmente independiente. Es decir, su objetivo es la secesión y formación de un Estado soberano propio, con poca o ninguna conexión con los gobernantes anteriores (Smith, 1981:13).

Estas aspiraciones, que hasta hace poco tiempo eran excepciones, son ahora recurrentes y, aunque incluyen una gran variedad de situaciones, el denominador común es la lucha de la comunidad étnica por su autodeterminación.¹⁹ Algunos de estos conflictos persisten desde hace varias décadas, en particular desde la creación de los estados en que quedaron incluidos —o de los que fueron excluidos— los grupos étnicos que luchan por su autodeterminación. Ésta es, por ejemplo, la conflictiva situación que prevalece en el Medio Oriente, donde destacan la lucha del pueblo kurdo que en 1923 fue dividido entre cuatro estados (Siria, Irak, Irán y Turquía) y en tan sólo una década ha sido afectado por dos guerras en el golfo Pérsico; y la lucha de los palestinos después de la formación del Estado de Israel en el contexto del histórico conflicto árabe-israelí. Éstos han sido un foco permanente de violencia y de atención internacional.

De las actuales luchas étnicas por la autodeterminación muy pocos casos plantean la liberación de un territorio de la dominación colonial. Quizás uno de los más sobresalientes sería el de Nueva Caledonia, donde la población nativa kanak, después de una prolongada y difícil lucha contra la dominación de Francia (que incluyó la formación de partidos y organizaciones políticas, así como diversos incidentes de represión y violencia) y la oposición de la población de origen francés que habita en la isla (37% del total), ha entrado en un proceso de transición que otorga amplia autonomía

¹⁹ La libre determinación de los pueblos, de acuerdo con la legislación internacional, significa el derecho a “establecer libremente su condición política y proveer asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”. No obstante, este derecho, tal como resulta del sistema de las Naciones Unidas, solo “existe para los pueblos sometidos a la dominación colonial y extranjera, que no viven bajo la forma jurídica estatal” y no se aplica a las minorías existentes en estados (Naciones Unidas, 1979:8 y 14).

a los consejos provinciales que conforman la isla y que culminará en 1998 con un referéndum en el que el electorado podrá votar por la independencia (Kircher, 1986; *Facts on File*, 1988:293-B1, 318-F2, 319-G2, 334-C1, 483-E2, 633-G1, 679-D2, 843-C1).

Otros movimientos étnicos por la autodeterminación, aunque basan sus reivindicaciones en reclamos históricos, constituyen un fenómeno reciente, como resultado de diversos procesos —internacionales y nacionales— que provocaron desequilibrios internos y debilitaron las otrora rígidas estructuras de poder. Tal es quizás una explicación del fuerte resurgimiento étnico y nacionalista, latente durante décadas, que amenaza con desintegrar a estados como la Unión Soviética o Yugoslavia.²⁰ Las repúblicas separatistas cuestionan su inclusión en estos estados de composición federal —particularmente Letonia, Lituania, Estonia que perdieron su independencia a raíz de la ocupación soviética— y plantean sus reivindicaciones en términos pacíficos, mediante la formación de partidos políticos —que cuentan con el apoyo mayoritario de la población local— y medidas parlamentarias tendientes a fortalecer su soberanía, en abierto rechazo al control del gobierno central. No obstante, los nacionalistas se han enfrentado a la enérgica oposición del centro y a la creciente represión gubernamental. En el caso de la URSS, el Occidente —particularmente Estados Unidos— ha seguido el conflicto con atención y apoya las reivindicaciones de Lituania, Letonia y Estonia, instando al líder soviético a una solución pacífica. La declaración de independencia de Lituania, el 11 de marzo de 1990 (secundada posteriormente el 30 de marzo y el 4 de mayo por Estonia y Letonia respectivamente), se enfrentó con el enérgico rechazo del gobierno central, que pasó de la negativa a entablar negociaciones a la intimidación militar y a un férreo bloqueo económico que obligó a Lituania, en julio de 1990, a “congelar” temporalmente las leyes decretadas con la declaración de independencia y a Letonia y Estonia a adoptar una posición más cautelosa. La URSS se ha esforzado por evitar la desintegración²¹

²⁰ Los conflictos separatistas en Yugoslavia (Eslovenia y Croacia) y la URSS (Lituania, Letonia, Estonia, Georgia y Moldavia) experimentan un desarrollo vertiginoso y constantes cambios, por lo que a la publicación de este artículo es posible que su situación sea muy distinta.

²¹ Estas medidas han sido diversas, y pasan por la promulgación de decretos que fortalecen los poderes del centro, entre ellos, algunos que autorizan la creciente represión militar en las repúblicas rebeldes; la entrada de tropas a las repúblicas bálticas en enero de 1991, cuando la atención de Estados Unidos y de la comunidad internacional se centraba en la crisis del Golfo Pérsico; la celebración de un

y, aunque las tensiones han aumentado debido a la intransigencia de ambas posiciones, las repúblicas independentistas persisten en restaurar su independencia por medios pacíficos.

En otras situaciones, sobre todo cuando no existieron o se han cerrado las instancias de negociación, es posible que los grupos étnicos recurran al terrorismo (vascos en España, sikhs en India), o a la formación de ejércitos guerrilleros (tamiles en Sri Lanka, musulmanes de Cachemira en India, karen en Birmania o Myanmar, entre otros). Aunque cada conflicto responde a factores muy diversos y presenta una dinámica específica, es posible afirmar que, con frecuencia, la reivindicación por la independencia constituye el último recurso después de una larga batalla que pudo iniciarse como una lucha por derechos culturales o por la autonomía del grupo étnico. Tal fue el conflicto en Sri Lanka entre la minoría tamil (de religión hindú) y la población mayoritaria cingalesa (budista), que pasó de las reivindicaciones lingüísticas y culturales de los tamiles a las demandas políticas. Éstas variaron desde la defensa de sus territorios tradicionales contra el asentamiento de cingaleses o la proposición de autonomía regional o federalismo hasta la demanda de un Estado separado (el Estado de Eelam). El rechazo del gobierno a satisfacer las demandas lingüísticas, políticas y educativas de los tamiles alimentó su lucha separatista y desencadenó la guerra civil. En ésta fue muy significativa la participación externa, en particular de India, que tuvo dos momentos clave: primero, el fortalecimiento de la lucha separatista al permitir las operaciones militares de los grupos rebeldes desde territorio indio —donde son decisivos los vínculos culturales, religiosos y lingüísticos que unen a los tamiles de ambos países—; posteriormente, al intervenir directamente en el país vecino para aniquilar al mismo movimiento que antes había apoyado. Las consecuencias fueron terribles, pues esta intervención no se tradujo en el fin de la lucha sino en su exacerbación (*cfr.* Schwarz, 1983; Kodikara, 1988; Hannum, 1988; Sivathamby, 1988; Rupesinghe, 1988).

Los conflictos descritos constituyen sólo unos ejemplos de las luchas étnicas por la autodeterminación que plantean serios cuestionamientos a la legitimidad de muchos estados. Las diferencias de contextos y la historia particular de cada comunidad, han conducido a distintas formas de lucha y a diferentes respuestas gubernamentales, e inciden de modo específico en el surgimiento y desa-

referéndum (17 de marzo de 1991) en torno a la futura permanencia de la Unión, en el cual se negaron a participar las repúblicas independentistas.

rrollo de cada conflicto. Aunque no se ha abarcado la totalidad de situaciones, ni de los factores involucrados en éstas, estos ejemplos permiten ilustrar las diversas modalidades que asume esta lucha. Como puede apreciarse, excepto en territorios bajo dominación externa o colonial, la secesión se presenta como una meta imposible debido a la prioridad del Estado de defender a toda costa la integridad de su territorio, defensa que justifica el empleo de la violencia, aun cuando los grupos étnicos sustenten su lucha en reivindicaciones legítimas (apoyadas incluso por la comunidad internacional) y la lleven a cabo por medios pacíficos.

Comentario general

A partir de esta visión panorámica he procurado mostrar algunos ámbitos en los que la identidad étnica se presenta como un elemento importante de conflicto y un factor central de movilización social y política. Más que intentar una conclusión, el objetivo de este trabajo fue mostrar, a través de la exposición de diversas situaciones de conflicto, la creciente importancia de la problemática étnica en los estados nacionales y las distintas modalidades que estas luchas asumen. La comparación de las distintas situaciones muestra que no todos los conflictos étnicos adoptan la vía política y que las diferencias étnicas, aun cuando muchas veces se erigen como la principal fuente de confrontación, en otros momentos desempeñan un importante papel en la exacerbación de un conflicto cuyas causas arrancan de otras condiciones. No obstante, el resultado es similar, en tanto que los grupos contendientes se identifican claramente como enemigos a causa de sus diferencias étnicas. En este sentido, aunque el origen de muchos conflictos puede ubicarse en causas económicas, sociales o políticas, durante su desarrollo éstas se “etnifican” a tal grado que difícilmente podría pensarse que desaparecerán cuando se solucionen los problemas (no étnicos) que les dieron origen.

En esta problemática aparece, latente o manifiesta, una profunda intolerancia a la diferencia, que se expresa tanto en las relaciones interpersonales como en las políticas oficiales que de manera directa o indirecta propugnan por la homogeneización como un requisito fundamental para consolidar y fortalecer la unidad nacional.

La recurrencia de estos conflictos prácticamente en todos los estados —sean éstos capitalistas o no, federalistas o centralistas—

parece mostrar, asimismo, una contradicción inherente entre el proyecto del Estado nacional y los proyectos étnicos. Mientras el primero actúa en favor de la unidad —aun a costa de las consecuencias sociales y humanas en un importante sector de la sociedad—, los segundos reclaman respeto a su identidad colectiva y modos de vida en los que basan su permanencia distintiva. Esta confrontación, con frecuencia, se traduce en una creciente ola de violencia y contraviolencia en la que el Estado generalmente desempeña un importante papel, sobre todo cuando se identifica con la etnia dominante y las aspiraciones étnicas de los grupos minoritarios u oprimidos son percibidas como una amenaza a la integridad de la nación.

Recibido en mayo de 1991
Revisado en octubre de 1991

